

CRIMEN ORGANIZADO TRANS- NACIONAL EN LA FRONTERA COLOMBO-BRASILEÑA: IMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD REGIONAL *

Coronel (Bra) Fabio Sampaio

* Este capítulo de libro resultado de investigación es producto del proyecto titulado “Crimen Organizado Transnacional y Conflictos Ambientales en AL” del Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad (CREES), que hace parte de la línea de investigación “Estrategia, geopolítica y seguridad hemisférica”, del grupo de investigación “Masa Crítica”, reconocido y categorizado en (B) por Colciencias, registrado con el código COL0123247, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia..

Introducción

La humanidad vive un momento único en su historia. La actualidad se ha caracterizado por incógnitas y paradojas. Hoy se ve un amplio reordenamiento del sistema internacional, con efectos altamente positivos en la sociedad, pero que se ha relacionado con tendencias preocupantes de desestabilización. Las nuevas tecnologías, al tiempo que permitieron una mayor aproximación entre las diversas comunidades, con el aumento de las relaciones sociales y económicas, también crearon espacio para nuevos desafíos en el campo de la seguridad y la defensa. En este sentido, Huntington (1996) ha advertido que:

Las administraciones estatales han perdido en gran medida la capacidad de controlar el flujo de dinero que entra y sale de su país y cada vez les resulta más difícil controlar el movimiento de ideas, tecnología, bienes y personas. Los límites del estado, en resumen, se hicieron cada vez más permeables (p.37)

La delincuencia, en sus diversas esferas de actividad, encontró en este proceso de transformaciones rápidas el suelo fértil para expandir sus actividades, ampliándolas desde el nivel local a una dimensión transnacional, con un aumento exponencial en sus ganancias. Las organizaciones criminales, al ampliar sus acciones en diferentes países, conectándose entre sí y estableciendo una red compleja de relaciones cooperativas y competitivas que se alternan con los intereses en juego, han hecho que se convierta el llamado Crimen Organizado Transnacional (COT) en una amenaza para el Estado, particularmente para aquellos con mayor fragilidad en su estructura institucional.

Dentro del contexto suramericano, estas estructuras criminales encontraron algunas facilidades: el entorno geográfico, con altas cadenas montañosas y bosques densos, que dificultan la inspección; la incapacidad de los Estados subcontinentes para estar presentes y ser efectivos en todo su territorio, crea áreas favorables para el establecimiento de estos grupos; y la vulnerabilidad social de la mayoría de las poblaciones latinoamericanas proporciona al COT mano de obra casi ilimitada. También se debe tener en cuenta que la cocaína, una de las principales fuentes de ingresos para el COT, se produce a partir de una planta nativa de los Andes, y tres países del continente (Colombia, Perú y Bolivia) dominan casi toda la producción mundial de esta droga. En este entorno de dificultades para la acción del Estado y factores favorables a la actividad criminal, se encuentra la región de la triple frontera Brasil - Colombia - Perú, donde, además de los factores ya mencionados; la superposición de autoridades, con diferentes regímenes legales y estructuras de seguridad frágiles, la proximidad de los centros de producción de cocaína y la facilidad del flujo de drogas a través del río, crean condiciones extremadamente positivas para el COT. Como resultado, importantes organizaciones criminales transnacionales, con negocios que abarcan las más diversas tipificaciones delictivas, se han establecido en la región, donde disputan espacio con grupos locales, aumentando significativamente los indicadores de violencia del área.

Paiva (2019) afirma que el tráfico de drogas en América Latina ha sido, desde su inicio, un fenómeno social transnacional que involucra políticas de control fronterizo entre países productores y consumidores. En un intento por restablecer su posición, los Estados involucrados han desatado una serie de medidas y han creado proyectos que les permitirán ser más efectivos en la Triple Frontera, reduciendo así, de una manera general, los impactos que la actividad criminal ha tenido en la economía y la sociedad local. Por lo tanto, están en marcha iniciativas unilaterales, cooperación bilateral e incluso acuerdos multilaterales, con la participación de las fuerzas armadas, la policía, la judicatura, la salud, la educación y otras entidades, que con un enfoque amplio e integrado buscan una solución efectiva para el problema.

Este capítulo busca estudiar los temas de la Triple Frontera Brasil - Colombia - Perú, caracterizando inicialmente el área, su evolución histórica y socioeconómica, para posteriormente presentar la acción de las diversas organizaciones criminales presentes en la región: sus actividades principales, formas de actuación, rutas de tráfico e impactos, terminando con medidas tomadas por los Estados interesados, ya sea internamente o en conjunto con otros países, para contener esta amenaza significativa al orden internacional planteada por la delincuencia organizada transnacional.

1. La Triple Frontera Norte

Trapezio amazónico, Triple frontera norte y Triple frontera son los nombres comúnmente utilizados para referirse a la región de cruce fronterizo de Brasil, Colombia y Perú, que abarca parte del estado brasileño de Amazonas, el departamento colombiano de Amazonas y el departamento peruano de Loreto. “Esta región es uno de los principales puertos de entrada de cocaína en territorio brasileño”. (Balieiro y Nascimento, 2015, p. 86).

Figura 1. Triple Frontera Brasil, Colombia, Perú



Fuente: Comando de Fronteira do Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva

La población local, bastante heterogénea, es de aproximadamente 150 mil personas, según datos presentados por Balieiro y Nascimento (2015), concentrándose principalmente en las ciudades de Tabatinga, Benjamim Constant y Atalaia do Norte (Brasil); Leticia y Puerto Nariño (Colombia) y Santa Rosa, Caballocha e Islandia (Perú). En 1776, los portugueses construyeron, en la confluencia de los ríos Javari y Solimões, el Fuerte São Sebastião de Xavier, con el objetivo de consolidar la posesión portuguesa y controlar la navegación en el área. Esta fortificación dio lugar, años más tarde, a la ciudad de Tabatinga. Ya Leticia surge con el Puesto Militar de San Antonio, construido por los peruanos en 1867. Con la firma del Tratado Salomón-Lozano de 1922, que establece los límites entre Perú y Colombia, se convirtió en parte del territorio de este último. Sin embargo, en 1932, un grupo de peruanos se rebeló e invadió Leticia. El episodio desencadenó un conflicto armado entre los dos países. Las negociaciones de paz, materializadas en el Protocolo de Río de Janeiro, de 1934, reafirmaron el tratado de 1922.

Santa Rosa, en el lado peruano, es la ciudad más reciente. A principios de la década de 1970, los agricultores comenzaron a cultivar arroz en la orilla peruana del río Amazonas. Las plantaciones estaban creciendo y algunas se convirtieron en campos de caña de azúcar. La organización de las familias residentes allí originó la ciudad de Santa Rosa de Yavarí, que fue reconocida oficialmente en 1974. La vocación agrícola prevalece hasta hoy, siendo la localidad responsable de una porción importante de los productos agrícolas que se consumen en la región. Aunque, el extractivismo fue el motor de la economía local hasta principios del siglo XX, especialmente el látex. Con el final del ciclo del caucho a mediados de la década de 1920, la explotación maderera creció en importancia. La regulación ambiental, así como la creación de reservas indígenas y de áreas de preservación han llevado a una disminución de la producción y a una crisis en la economía regional.

A partir de la década de 1970, el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína para satisfacer la demanda del mercado estadounidense alteraron profundamente las relaciones socioeconómicas en el área. Según Paiva (2019) la distancia y los problemas enfrentados por los mer-

cados nacionales para abastecer a la región crearon varios intercambios transfronterizos que llevaron a las poblaciones de la triple frontera a buscar formas de adaptar localmente las circunstancias a sus necesidades y posibilidades. En este sentido, el negocio de la cocaína, con una compleja red de proveedores, trabajadores de diversas especialidades, sucursales y servicios, se ha convertido en una oportunidad, y las buenas oportunidades de empleo son escasas, especialmente para los jóvenes.¹

En cuanto a los aspectos fisiográficos, la economía de la región de la Triple Frontera es extremadamente dependiente de los ríos. Sin acceso por carretera, representan la principal vía para el desplazamiento de personas y para el comercio. El otro modo disponible es el aéreo, sin embargo, tiene un costo muy alto en comparación con el fluvial. El río Solimões, que bordea Tabatinga y Leticia, es la principal vía fluvial de la región. Según Euzébio (2014):

Tiene 1.630 km navegables y está abierto a buques mercantes, que pueden navegar a través de su lecho hasta la ciudad de Iquitos (Perú). Viajan desde pequeñas cargas, en grandes cantidades para satisfacer las necesidades de las poblaciones ribereñas, hasta vagones y contenedores, incluidos productos derivados del petróleo que abastecen a la población ribereña en el suministro de plantas termoeléctricas (p.6).

También son dignas de mención las rutas fluviales de Caquetá-Japurá, Putumayo-Içá y Marañón-Amazonas, ampliamente utilizadas desde el siglo XVII, ya sea como rutas de contrabando, rutas de exportación de caucho y madera, o para el tráfico de narcóticos de las regiones productoras de Perú y Colombia.

Debido a factores fisiográficos y baja densidad de población, la presencia del estado en la región siempre ha sido pequeña. A partir de la década de 1980, Brasil, Colombia y Perú, los cuales buscaban combatir

1 El mercado de drogas ilegales carece de personas capacitadas para actividades rutinarias, como empaquetar las drogas. Hay insumos además de la hoja de coca, y todos ellos deben ser adquiridos a través de la acción de personas que ganan su dinero proporcionando algún tipo de apoyo para el tráfico de cocaína. Y las personas en contacto con estas actividades no creían que fueran delincuentes o se encontraban haciendo algo mal. Es poco probable que las personas que se dedican al tráfico de drogas obtengan los beneficios que ofrece el negocio del narcotráfico en otras formas de trabajo, lo que ayuda a explicar la gran influencia que ejerce el narcotráfico en la comunidad local.

el desempeño de la delincuencia transnacional organizada, invirtieron en infraestructuras e instituciones, intensificando la acción institucional en esta franja fronteriza.

Las tablas 1 y 2 muestran las principales instituciones actualmente presentes en Tabatinga y Leticia, respectivamente:

Tabla 1. Principales instituciones en Tabatinga por año de instalación

Instituciones y Empresas	Año	Instituciones y Empresas	Año
Pista de aterrizaje pequeña	1965	Tribunal de Justiça do Trabalho	1989
Comando de Frontera de Solimões/8º Batallón de Infantería de Selva	1967	Inspetoria da Receita Federal	1991
Puerto de Tabatinga y Banco do Brasil	1976	Delegacia de Polícia Federal Tabatinga	2000
Bradesco	1978	Universidad del Estado del Amazonas	2003
Aeropuerto Internacional (INFRAERO))	1980	Ministério Público Federal y Justicia Federal	2004
Hospital de Guarnición de Tabatinga y 9º Distrito Naval	1982	Caixa Econômica Federal	2007
Municipio de Tabatinga, instalación	1983	Foro de Justicia del Distrito de Tabatinga	2008

Fuente: Eusebio, E. F., (2014), a partir de trabajos de campo.

Tabla 2. Principales instituciones en Leticia

Instituciones y Empresas	
Aeronáutica civil y Apostal	Departamento de Policía Nacional
Armada Nacional y Colegio Naval de Leticia	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Banco Agrario de Colombia y Banco de la República	Hospital San Rafael de Leticia e Instituto de Seguros Sociales-ISS
Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil	Inspección Fluvial

Instituciones y Empresas	
Comando Unificado del Sur (Ejército) y Batallón de Infantería de Selva N° 50 y N° 26	Secretaría de Educación y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Departamento Administrativo de Seguridad-DAS	Contraloría General de la República y Procuraduría Departamental
Universidad Nacional (Instituto IMANI)	Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA)

Fuente: Eusebio, E. F., (2014), a partir de trabajos de campo.

Esta intensificación puede entenderse por haberse cambiado el enfoque en el tráfico de drogas: los Estados y la sociedad, en general, han empezado a ver el problema de las drogas no solo como un caso de sanidad pública, sino también como una amenaza a la seguridad pública y a la soberanía nacional.

La mayor supervisión y los cambios en las relaciones sociales y económicas que se han producido desde la década de 1990 han traído una nueva dinámica a la región. El narcotráfico continuó siendo un componente importante de la vida cotidiana local, dominando el debate, las políticas y las acciones institucionales, mientras que, entre las estructuras ilegales, los esquemas grandes, medianos y pequeños empezaron a vivir juntos, encontrando formas de cooperación o resolviendo violentamente los conflictos existentes.

Actualmente en la Triple Frontera, varias fórmulas económicas compiten por el espacio. Como las peculiaridades locales obstaculizan el desarrollo de la economía formal, muchas personas buscan su sustento en la economía informal, lo que en última instancia facilita el crecimiento de la economía ilegal, ya que la línea entre estos dos modelos es muy delgada. Como resultado de esta proximidad, las personas que están en contacto con el mundo de las drogas no se les considera delincuentes e incluso existe cierta simpatía entre la población y aquellos que practican economías ilegales y economías informales. Esta falta de percepción de ilegalidad, junto con las dificultades geográficas y la fragilidad institucional, hacen de la región un territorio muy favorable a la acción del crimen organizado transnacional.

2. Delincuencia en la región de la Triple Frontera

Después de la caída del Muro de Berlín, el control estatal no pudo mantener el ritmo de la globalización económica. Como resultado, la apertura y el crecimiento sin precedentes en el comercio, las finanzas, los viajes y las comunicaciones ha creado un crecimiento económico y bienestar para las personas, pero también ha dado lugar a enormes oportunidades para que los delincuentes expandan sus negocios.

El crimen organizado se ha diversificado. Se ha vuelto global y alcanzó proporciones macroeconómicas, convirtiéndose en una importante amenaza para los estados. Se está infiltrando en la política y la economía, obstaculizando el desarrollo y socavando la gobernanza.

La Triple Frontera amazónica coexiste con las redes internacionales de tráfico de drogas desde el año 1970. De acuerdo con los estudios Paiva (2019), “un informe oficial de 1973 declaró que por su aeropuerto [Leticia] salían 1.200 kilos de alcaloide [cocaína] cada año” (p.5).

Se pueden identificar dos modelos productivos. Uno que se extendió desde principios de la década de 1970 hasta la década de 1990, a lo que Machado (2002) señala que Perú y Bolivia se establecieron en el cultivo y como proveedores de hojas de coca y pasta base, mientras que Colombia se dedicó a la producción de cocaína, estableciendo un proceso de producción transnacional. Y otro, de la década de 1990, en el que toda la cadena de producción comenzó a establecerse en cada uno de los países productores.

Ya en el primer período, las vías fluviales de la región de la Triple Frontera adquirieron gran importancia en el transporte de los insumos producidos en Perú y Bolivia a los laboratorios de los departamentos colombianos de Caquetá, Putumayo y Guaviare. Como resultado, un gran volumen de dinero comenzó a circular por toda la región. Surgió el Cartel de Leticia, encabezado por Evaristo Porras Ardilla, quien se convirtió en el principal proveedor del Cartel de Medellín, de Pablo Escobar. La ciudad de Leticia durante este período ha experimentado un gran desarrollo, con la economía local impulsada por el dinero del tráfico.

El crecimiento en el número de sucursales bancarias en la región amazónica sugiere que las redes internacionales de tráfico han estado llevando a cabo operaciones financieras en la región al menos desde la década de 1980. Según una investigación realizada por Machado (2001), el número de sucursales en los estados brasileños de Rondônia, Acre y Amazonas, que abarcan la frontera amazónica con Bolivia, Perú y Colombia, crecieron un 76% entre 1981 y 1985. La tasa nacional en el período fue del 26,6%. Para el estado de Amazonas, donde se encuentra la Triple Frontera, el crecimiento fue del 38%.

Es interesante notar que el mayor crecimiento se produjo en ciudades con menos de 25.000 habitantes, poca presencia estatal, trabajadores con salarios bajos y una economía frágil. En este universo, el número de sucursales aumentó 58% en el estado de Amazonas.

Si se considera que la producción de coca y cocaína casi se duplicó durante este mismo período, generando operaciones financieras para costear actividades y lavar ganancias, y que en la región solo estos bancos brasileños estaban vinculados al sistema financiero internacional, concluiremos que esta expansión está relacionada al crecimiento del narcotráfico. De hecho, este fue un período de crisis financiera y estancamiento económico en los países de la región.

Más tarde, en respuesta a los cambios en la situación regional e internacional, el narco negocio tuvo que adaptarse. A mediados de los años 90, cuando aumentó la lucha contra el tráfico de drogas en Colombia, los principales carteles, incluyendo el de Leticia, fueron desmantelados. Con una economía fuertemente dependiente de los recursos financieros del tráfico, la región experimentó una grave crisis en su economía.

Entre finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, comenzó a notarse una nueva tendencia. Colombia pasó a presentar grandes áreas de cultivo, concentrando todas las etapas de producción y consolidándose como el principal productor y exportador. Al mismo tiempo, Perú y Bolivia también aumentaron sus laboratorios de cocaína. La metodología transnacional fue reemplazada por un proceso que buscaba concentrar todas las etapas dentro de los límites territoriales de los países.

Durante este período, las exportaciones, que se concentraban principalmente en los consumidores estadounidenses, encontraron nuevos mercados en Europa y, en menor medida, en África. Como resultado, se establecieron nuevas rutas a través del territorio brasileño y las vías fluviales de la Triple Frontera, que se utilizaban principalmente para transportar hojas de coca y pasta base desde Bolivia y Perú a los laboratorios colombianos, pasaron a ser utilizadas intensamente para el flujo de producción de pasta base y clorhidrato de cocaína al mercado exterior.

Ríos, carreteras locales, aeropuertos y pistas de aterrizaje clandestinas se han convertido en parte de la logística intermodal del tráfico. Barcos y pequeños aviones conectaban las áreas productoras, los valles de los principales afluentes del río Amazonas, el estado escasamente ocupado del Amazonas y el Océano Atlántico para llegar a nuevos mercados.

Una porción significativa de la cocaína que previamente llegaba a los Estados Unidos a través del Pacífico y el Caribe se transfirió a esta ruta, lo que aumentó la importancia del territorio brasileño y la Zona de la Triple Frontera para las organizaciones criminales. En la década de 1990, la incautación promedio anual de cocaína en la Triple Frontera alcanzó las 5.24 toneladas, más de cinco veces el promedio de la década de 1980.

Otro efecto de este cambio en el modelo de producción y comercialización fue la aparición de asociaciones del tráfico de drogas y el contrabando en la cuenca del Amazonas. El oro, los productos de la electrónica, los suministros químicos, los aviones pequeños y los automóviles robados fueron sacados de Brasil de contrabando a cambio de pasta base, cocaína y armas.

En su operación, el negocio del tráfico eventualmente se conecta con otros delitos. El satisfacer las demandas de los mineros, por ejemplo, se vincula a las zonas ilegales de minería y prostitución creadas por estos. Los grandes recursos generados por el narcotráfico exigen prácticas de lavado de dinero. Por lo tanto, adquirir comercios o empresas de servicios en la región de la Triple Frontera se ha convertido en un camino. También durante las campañas electorales se puede observar la realización de acuerdos que permiten a los traficantes lavar dinero.

Transportar cocaína desde la Triple Frontera a los mercados nacionales e internacionales es el principal problema del narcotráfico en la región. De ahí la diferencia de precio de 1 gramo de cocaína en Tabatinga con el precio de esta misma cantidad de drogas en Lisboa, por ejemplo. Según los estudios de Paiva (2019), el kilo de pasta base de cocaína vale de 7 a 12 mil reales en Manaus. Cuando llega a las ciudades del Nordeste brasileño, vale 20 mil reales y en Europa puede costar hasta 60 mil euros.

El gran volumen de la droga transportada por el agua estimuló la presencia de piratas en los ríos amazónicos. Con sede en la región de Iranduba y Manacapuru, robaron envíos de drogas antes de su llegada a Manaus. Otro punto de ataque contra los envíos fue entre las ciudades de Tefé y Coari. Estos piratas, al tomar posesión de la droga, exigen rescates o negocian con otros traficantes. Su acción se ha convertido en un problema para el tráfico. La Familia del Norte (FDN), una organización de Manaus, ha invertido en armas grandes para mejorar sus esquemas de seguridad de transporte. Otros grupos a menudo usan pistoleros contratados para proteger sus envíos.

Además de la amenaza de los piratas, las acciones de otros traficantes y policías corruptos también afectan el transporte de drogas. La disputa sobre el control de los ríos es tan grande que hay informes de que el Primer Comando de la Capital (PCC), un grupo con orígenes y características muy urbanas estaba contratando a ex guerrilleros de las FARC, con experiencia en combate en el área de selva, para enfrentar la FDN y así tratar de asumir la hegemonía en la ruta del Solimões.

3. Tráfico de drogas y organizaciones criminales en la ruta del Solimões

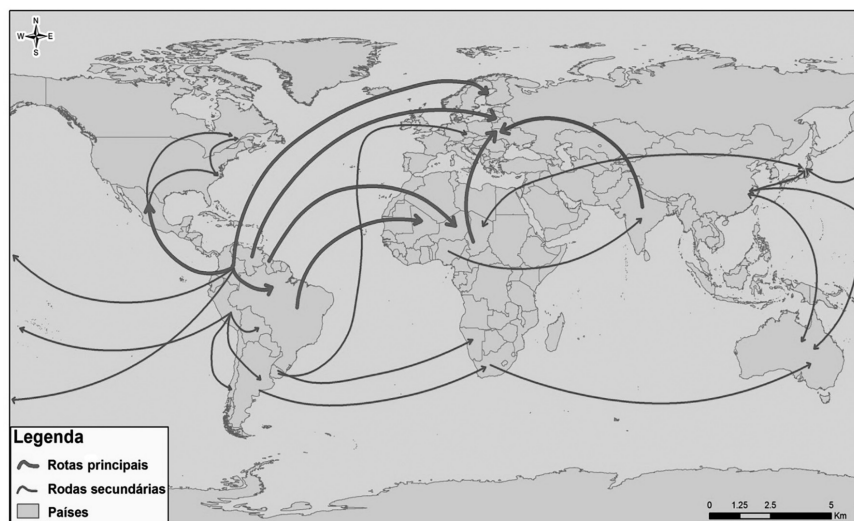
Con la intensa lucha contra el narcotráfico desencadenada desde la década de 1990, se llegó el comienzo de la década de 2000 con la percepción de que los carteles tradicionales ya no tenían la misma fuerza. Lo que se observaba era la acción de grupos más pequeños que competían por los mercados locales y por la ruta del río Solimões.

En el contexto colombiano, la sospecha de financiamiento de la campaña de Ernesto Samper (1994-1998) por parte del Cartel de Cali llevó a este presidente a estar, a lo largo de todo su mandato, bajo la presión de los Estados Unidos. Un resultado fue el logro de una de las mayores destrucciones de áreas de cultivos ilícitos en la historia colombiana. También se llevaron a cabo acciones que condujeron al arresto de los jefes de ese cartel. Durante este período, se firmaron acuerdos bilaterales, como el Plan Colombia, y se tomaron medidas judiciales, como el restablecimiento de las extradiciones en la Constitución y el aumento de las sanciones.

Sin embargo, a pesar del dismantelamiento de los carteles y la reducción de los cultivos, se descubrió que el tráfico de drogas ha adquirido una nueva configuración, con una mayor fragmentación del comercio y la vinculación de estos grupos a las redes mundiales del crimen organizado. En este modelo, las organizaciones más pequeñas y dispersas se han convertido en empresas que se especializan en parte del ciclo de producción o comercialización de drogas, lo que ha dificultado el trabajo de identificación de las autoridades. El desempeño reciente de las diversas organizaciones criminales presentes en la Triple Frontera tiene la voluntad de evitar la confrontación con las fuerzas policiales. Los traficantes adoptaron la estrategia de evadir confrontaciones directas para permitir una mayor integración con la sociedad local, creando así una capa de respeto que les permitiría ocultar sus actividades y no despertar sospechas sobre la fuente de sus ganancias.

En Brasil, una operación lanzada por la Policía Federal (Operación La Muralla) en 2015 sacó a la luz un gran esquema operado por una organización en el estado de Amazonas, la Familia del Norte (FDN). Las investigaciones revelaron el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde la triple frontera, a través de Manaus, ciudades del noreste de Brasil y desde allí a Europa.

Figura 2. Rutas internacionales del tráfico de cocaína



Fuente: UNDOC (2013), adaptado de Couto (2016).

Los informes (Policía Federal, 2019) de la operación revelan la incautación de aproximadamente 2,2 toneladas de drogas, valoradas en ese momento en 18 millones de reales. Este gran volumen fue transportado desde compartimentos preparados en grandes vasos. La FDN protegió sus envíos mediante la adopción de estrictas medidas de contrainteligencia respaldadas por aplicaciones de mensajería.

Aún en el curso de las investigaciones, quedó claro que los esquemas de transporte apoyaban una estructura más grande. Según los hallazgos de la Policía Federal, la FDN es hoy la tercera organización criminal más grande de Brasil, y mantiene con Comando Rojo (CV en la sigla en portugués), una organización criminal de la ciudad de Río de Janeiro, una relación de asociación para beneficio mutuo.

La historia de la FDN es relativamente reciente. Según la Policía Civil del Estado de Amazonas (2017):

El crimen organizado en el estado del Amazonas se consolidó con el nacimiento de grupos especializados en el tráfico de drogas y se originó a prin-

cipios de la década de 2000, una década después del surgimiento de las primeras facciones de drogas en el país. La expansión de las empresas locales atrajo el interés de las organizaciones criminales nacionales, transformando la realidad de los puntos de venta de sustancias ilegales restringido a los barrios del centro urbano más grande del estado (Manaus) en auténticos consorcios de facciones vislumbrados por el dominio del negocio ilícito de la ciudad y sus alrededores. (p. 16)

De estas fusiones entre grupos locales y nacionales nacieron “franquicias” con estructuras y procedimientos muy cercanos a sus inspiradores, el CV y el PCC. En este período dos organizaciones ganaron prominencia: el Primer Comando del Norte y los Amigos de Amazonas. La consolidación de estos dos grupos en una sola estructura dio lugar a la FDN. La iniciativa tenía como objetivo fortalecer el tráfico en las cercanías de Manaus y la expansión de su distribución a los estados vecinos. La medida en que se sintió sedimentada, la FDN buscó ampliar su posición con el comercio internacional y negociaciones más estrechas con las áreas productoras.

En poco más de un año, la FDN se estableció como la facción más grande e influyente de la región norte. En 2013 se organizó siguiendo las líneas de los principales grupos del país, con una estructura jerárquica organizada en un ‘comando’, que tenía la última palabra sobre todos los asuntos del grupo y un ‘consejo’, que discutía con el ‘comando’ todos los temas principales de la facción, recibiendo, por su delegación, la tarea de ‘resolver’ problemas y demandas.

Este liderazgo se ejerció desde dentro de las cárceles con base a un estatuto propio. La implementación de los pilares de la jerarquía y la disciplina en la organización llegó a través de métodos de violencia extrema que permitieron, además de la supremacía en el sistema penitenciario local, el control territorial de varios barrios de Manaus, lo que llevó a la organización al dominio de la actividad criminal en la ciudad. Una estrategia ampliamente utilizada fue la afiliación obligatoria de los traficantes al ingresar al sistema penitenciario. Los nuevos detenidos también debían informar sus métodos de operación y sus contactos. Este procedi-

miento fue uno de los factores que permitieron a la FDN controlar la ruta del Solimões.

La FDN opera una gran estructura logística enfocada en el transporte y envíos de grandes cargas de cocaína, siendo la ciudad de Manaus un centro de distribución para la organización. La droga llega a la capital amazónica principalmente por el río Solimões y desde allí se transporta a otros destinos. Una de las rutas utilizadas es del río Amazonas a Belém, desde donde va al noreste de Brasil y luego a África occidental y Europa. También hay un esquema de envío de drogas para el estado de Río de Janeiro, escondidas en compartimentos especialmente preparados en vehículos y otro envío de drogas a través de mulas² hacia el extranjero, especialmente a Portugal y a las otras metrópolis brasileñas.

Según las investigaciones de la Policía Federal (2016), para obtener su suministro, la FDN trabaja con el narcotraficante peruano Wilder Chuquizuta Velayrse, también conocido como alias ‘tronco’, uno de los proveedores de drogas de la Triple Frontera más antiguos y tradicionales, residente en Leticia y con los hermanos Lenivaldo Alves De Freitas, alias ‘leleio’ y Jose Carlos De Freitas, alias ‘verdinho’. Los hermanos Freitas han alcanzado en los últimos años un poder económico muy alto, al tener varias compañías para lavar el dinero obtenido al transportar grandes cargas de cocaína a Manaus, y se han convertido en uno de los principales proveedores de la organización. Para realizar los movimientos financieros relacionados con el pago de sus proveedores, la FDN utiliza depósitos bancarios fraccionados en cuentas corrientes de personas físicas y jurídicas domiciliadas en Tabatinga.

El arresto de traficantes colombianos y varios brasileños con vínculos con traficantes peruanos y colombianos en la región de Leticia indicó la importancia de la Triple Frontera para el tráfico de drogas. Las embarcaciones adaptadas para viajar largas distancias sin abastecimiento reciben drogas en Santa Rosa (Perú) para su transporte a Manaus. La droga es transportada en compartimentos especialmente preparados en grandes vasos. El proceso también incluye el uso de armas de alto

2 El término mula se ha adoptado para referirse a las personas que llevan pequeñas cantidades de drogas en su equipaje, ropa o incluso dentro de su propio cuerpo en cápsulas especiales que se ingieren.

calibre y medidas de contrainteligencia, como el uso de aplicaciones de mensajería instantánea y el sistema Blackberry Messenger - BBM para la comunicación.

En otro aspecto de sus acciones, la FDN busca la corrupción de las autoridades para facilitar la entrada de materiales ilícitos en las cárceles, advertir sobre la realización de inspecciones y revistas, e incluso, negociar decisiones judiciales, como transferencias de prisioneros y libertad condicional y/o arrestos domiciliarios. En este sentido, los abogados de la organización han estado utilizando certificados médicos falsos para obtener arresto domiciliario para los cabecillas del grupo.

Otra amenaza para la sociedad está representada por el apoyo de la facción a la campaña política de algunos candidatos. Además de ser una forma de blanquear dinero del narcotráfico, lo que la organización criminal busca con este apoyo es una acción legislativa favorable a sus intereses. La FDN busca una posición de independencia de otras organizaciones, pero desde su inicio encuentra una mayor empatía con el CV, el grupo más antiguo de Brasil.

El origen del CV se remonta a la década de 1970, resultado de la alianza entre prisioneros ordinarios y militantes izquierdistas encarcelados en la prisión de Ilha Grande, en la costa de Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro.

Inicialmente bajo el nombre de Falange Roja, la organización surgió como una forma de protección entre los detenidos y en las calles se dedicaba a los asaltos y robos a bancos. Estas actividades criminales proporcionaban recursos para mejorar las condiciones de vida de los miembros arrestados y para financiar los intentos de escapar.

A partir de la década de 1980, ya bajo el nombre de Comando Rojo, comenzó a dedicarse al narcotráfico, trabajando con los carteles colombianos y asumiendo el papel del estado en muchos barrios marginados de la ciudad de Río de Janeiro.

El CV se estableció como socio de los carteles andinos por su estructura, capaz de recibir y distribuir un gran volumen de drogas. Para mantener esta capacidad, la organización comenzó a expandirse, tomando posesión de los territorios del narcotráfico. Esta disputa con facciones

rivales por el espacio y la influencia puede considerarse la raíz de los enfrentamientos entre organizaciones criminales que aún afectan a la ciudad de Río de Janeiro.

El grupo obtuvo el control de grandes áreas en los barrios más pobres de la ciudad, a menudo abandonados por los gobiernos, asumiendo una estructura paralela al poder estatal. A fines de la década de 1990, con la caída de los barones del juego ilegal, el CV se convirtió en la principal organización criminal de Río y en 2005 controlaba más del 50% de las áreas peligrosas de la ciudad.

En 2001, el arresto en Colombia de uno de sus líderes, Luiz Fernando da Costa, también conocido como ‘Fernandinho Beira-Mar’, acusado de negociar el suministro de cocaína a cambio de armas, expuso los vínculos de la organización con las FARC.

A diferencia de otras organizaciones, el CV no tiene una estructura jerárquica rígida, adoptando un organigrama horizontal y un curso de acción independiente entre sus miembros. Sin embargo, algunos líderes se destacan, como Fernandinho Beira-Mar.

Durante mucho tiempo, el CV estuvo aliado con el Primer Comando de la Capital (PCC), pero la ruptura de la alianza entre estas facciones, que ocurrió en 2016, puede señalarse como una de las causas de la ola de violencia que ha estado afectando al sistema penitenciario brasileño. Esta disputa va más allá de las cárceles, llegando a las calles de Río de Janeiro, donde el CV disputa el espacio con otras organizaciones criminales, como el Tercer Comando Puro y los Amigos de los Amigos. Este último, incluso, ha buscado el apoyo del PCC para conquistar el control territorial en la ciudad. Otro adversario que enfrentan los del CV son las milicias, formadas por oficiales de seguridad retirados o en servicio activo, que comenzaron a establecerse en barrios pobres ofreciendo servicios de protección y ahora recurren a la extorsión y otras prácticas criminales para controlar estas comunidades.

A pesar de los conflictos, CV ha estado expandiendo su presencia internacional, particularmente en Paraguay, y utiliza su alineación histórica con la FDN para llevar drogas desde Colombia a la capital del estado del Río de Janeiro a través de la ruta del Solimões.

Otra organización criminal importante que opera en la Triple Frontera y en la ruta del Solimões es el Primer Comando de la Capital (PCC). El PCC surgió de la unión de ocho prisioneros de la capital del estado de São Paulo (São Paulo) que cumplían sus condenas en la prisión de Taubaté, en el interior del estado. Buscando la protección mutua contra la hostilidad de los otros prisioneros, los ‘de la capital’, como se les llamaba, comenzaron a usar la violencia e incluso los homicidios para asegurar su supervivencia.

El nombre PCC originalmente se refería al equipo de fútbol que este grupo formó para jugar en un torneo interno en prisión. Fue en este torneo, celebrado en 1993, que la organización pudo tomar el control interno de la prisión y ganar la lealtad de los otros detenidos asesinando a los criminales más temidos en la prisión de Taubaté durante un partido.

Después de tomar el control, el PCC adoptó un discurso de unidad, buscando establecer una organización fuerte que protegiera a sus asociados dentro y fuera de las cárceles. Dos pilares guiaron al grupo: a los encarcelados, protección y eliminación de los rivales, mientras que a los que estaban en las calles se les ofrecería asistencia legal, patrocinada por una contribución mensual de los miembros. Este modelo sindical atrajo a muchos miembros y el proyecto se extendió a otras cárceles.

En 1999, cuando el ladrón de bancos Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como alias ‘marcola’, llegó al timón de la organización, el PCC sufrió una transformación. Conocido por su inteligencia privilegiada, impuso una nueva dimensión al grupo. Los miembros que eran libres comenzaron a ser vistos como un activo para dar a la organización más dinero, influencia y poder. Además, involucró al PCC en el tráfico de drogas, el robo de bancos y adoptó una visión comercial, utilizando la violencia para eliminar competidores y ganar nuevos mercados.

La actitud del estado de São Paulo, al negar la existencia del grupo y trasladar su liderazgo a otras ciudades e incluso a otros Estados, ayudó a expandir la organización en todo el país. En febrero de 2001, el PCC hizo su primer movimiento importante. Según los datos recopilados por Coutinho (2019), aproximadamente 28.000 prisioneros tomaron el con-

trol de 29 cárceles en 19 ciudades del estado de São Paulo. Más de 10.000 personas fueron tomadas como rehenes. La revuelta fue controlada en 27 horas, pero afectó profundamente la forma en que el estado trató con el grupo. Confiados en la capacidad de movilización evidenciada en lo que se consideró el mayor motín en la historia de Brasil, los líderes del PCC se sintieron en posición de chantajear al Estado.

El arresto de Mauricio Hernández Norambuena, un guerrillero chileno vinculado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien había comandado el secuestro de un empresario brasileño en 2002, llevó al PCC a un nuevo plan. Altamente calificado, el guerrillero comenzó a compartir celda con ‘marcola’, transmitiéndole nuevos conceptos como el de guerra asimétrica y la guerrilla urbana, además de proponer un objetivo político como forma de perpetuar la empresa criminal del PCC.

Al adoptar el camino del terrorismo, el PCC intentó interferir con el proceso electoral en curso para el gobernador del estado de São Paulo en 2002, pero la acción policial frustró la iniciativa. En 2006, otro año electoral, la organización volvió a trabajar, pero con una estrategia diferente. Durante nueve días se lanzaron 293 ataques contra estaciones de policía, edificios públicos, autobuses, policías y agentes estatales. La ciudad más grande de América Latina, São Paulo, quedó paralizada por la ola de terror.

En años posteriores, el Tribunal Electoral encontró evidencia de una nueva forma de acción política por parte del PCC, el financiamiento de campañas. En 2016, “de un total de 730.000 donaciones registradas a candidatos y partidos que se postularon para la alcaldía y concejales, al menos 300.000 provenían de personas sin capacidad financiera para hacerlo. Las primeras investigaciones indicaron que organizaciones como el PCC estaban detrás del movimiento financiero” (Coutinho, 2019, p. 62).

Después de consolidarse en Brasil, el PCC se expandió a otros países. En Paraguay opera en la producción y distribución de marihuana, y en el contrabando de cigarrillos falsificados, armas y municiones. En Bolivia, es el principal cliente para la compra de cocaína y coordina la distribución de drogas bolivianas en Brasil. Además, el PCC también opera en Perú y, con la desmovilización de las FARC en Colombia, ha

reclutado a exguerrilleros con dominio de combate en áreas de la selva para luchar por el dominio sobre las rutas de tráfico del Amazonas.

Esta disputa por el espacio en la región norte es la causa de confrontaciones extremadamente violentas con la FDN y el CV, que se reflejan en las diversas masacres que han estado afectando a las cárceles locales. Las tácticas del PCC para la región norte fueron inicialmente tomar el control del crimen en la región noreste de Brasil, donde se encuentran los puertos de envío de drogas a los Estados Unidos, África y Europa, para posteriormente expandirse a la Amazonía.

Un retrato de este procedimiento es la expansión de las áreas que el grupo controla en la ciudad de Fortaleza, una de las ciudades más densamente pobladas de Brasil, con un puerto importante y relativamente cerca de Belém, en la desembocadura del río Amazonas, ciudad portuaria relevante dentro de la ruta del Solimões, una de las principales vías de entrada de cocaína desde Colombia y Perú en el país.

Esta fase puede considerarse completada a la luz del dominio significativo que tiene el PCC sobre la distribución y comercialización de drogas en el noreste, especialmente en los estados de Ceará y Rio Grande do Norte.

La masacre que tuvo lugar en Altamira, en el interior de Pará, en julio de este año, cuando miembros de una facción conocida como el Comando Clase A, vinculado al PCC, mató a 57 detenidos filiados al Comando Rojo, un aliado de la FDN en el control del tráfico de drogas a lo largo de la ruta del Solimões; indica el movimiento del grupo de São Paulo hacia el Amazonas, territorio controlado por el consorcio CV-FDN.

4. Agendas de seguridad, acciones estatales y de la comunidad internacional

Brasil y Colombia han mantenido históricamente cierta distancia en sus relaciones diplomáticas. A pesar de los momentos de intenso contacto, generados principalmente por situaciones de crisis, como en el caso del conflicto entre Perú y Colombia de 1932, cuando la mediación brasileña condujo a la solución del estancamiento, los dos países mantuvieron diferentes enfoques en su política exterior.

La política exterior colombiana estuvo marcada por la necesidad de responder a los problemas de seguridad interna que impactaron profundamente a su población. Las incertidumbres generadas por el conflicto interno han afectado la imagen del país en el escenario internacional al amenazar la estabilidad y la seguridad del continente.

Interesado en restaurar el equilibrio regional y preocupado por los efectos de las drogas colombianas que ingresan a su país, Estados Unidos siempre ha sido muy influyente en el escenario colombiano, con una intensa ayuda económica y militar. Esta cooperación alinea la política exterior colombiana con los objetivos de Estados Unidos para América del Sur.

En términos de percepción regional, aunque adopte una intensa búsqueda de cooperación con los países del continente, el desempeño brasileño es visto por estos países, en algunas situaciones, en una posición hegemónica. En gran parte, esto puede entenderse como una consecuencia del esfuerzo brasileño por buscar el liderazgo regional. Con respecto a la cooperación en seguridad y defensa, Brasil ha estado jugando un papel clave en el continente.

Analizando el tema desde mediados del siglo pasado, observamos que a partir de la década de 1960 hasta la de 1980, la política exterior brasileña estaba muy centrada en establecer una relación bilateral con los Estados Unidos y, en América del Sur, se centraba en los países de la cuenca del río de la Plata. Como resultado, en este período se prestó poca atención a las naciones andinas.

En contraste, de 2003 a 2010, la política exterior brasileña estuvo más enfocada en construir una América del Sur más segura y estable. Con esto, las instituciones regionales han ganado un papel relevante, buscando aumentar la gobernanza y la autonomía regional. Inevitablemente, la autonomía se refleja en la seguridad y el tema ha ganado protagonismo en la agenda política, especialmente con respecto a los territorios amazónicos.

Biodiversidad; recursos naturales y minerales; potencialidades para los transportes, generación de energía y disponibilidad de agua, representadas por la cuenca fluvial más grande del mundo, son algunos vectores de esta relevancia. Otras características de la Amazonía, como la baja densidad demográfica y la pequeña presencia de acciones de supervisión

del estado, que a su vez han favorecido el desempeño del crimen organizado transnacional, también son vectores de atención.

En consecuencia, la importancia estratégica de la Amazonía, junto con la intensa actividad de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, han impuesto a los países amazónicos una cooperación más estrecha. Sin embargo, debe considerarse que, si bien la Amazonía representa para Brasil un punto clave en su proyecto nacional, los territorios amazónicos no reciben la misma prioridad en Colombia.

A pesar de las diferencias de perspectiva, se han emprendido varias acciones cooperativas. La primera iniciativa multilateral a este respecto fue el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en 1978. El acuerdo tenía como objetivo consolidar un proceso de integración regional, vinculando a la Amazonía como un tema de política nacional de los estados que comparten la soberanía de la cuenca del Amazonas.

En los últimos años, las iniciativas multilaterales de integración regional como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), establecida en 2008, han tratado de consolidar la identidad de América del Sur, generando un mayor acercamiento entre Colombia y Brasil. Sin embargo, la organización no ha avanzado mucho, quedando paralizada desde 2017 debido a la falta de consenso en la elección de su Secretario General.

Para hacer un contrapunto a UNASUR, se buscó la formación de un nuevo bloque con una estructura más ligera y flexible. Por lo tanto, en 2019, ocho países, incluidos Brasil, Colombia y Perú, se unieron al proyecto PROSUR, que pretende ser una herramienta ágil de toma de decisiones y promoción para la integración regional. La iniciativa, aunque reciente, es otro punto de contacto entre los países de la Triple Frontera y entre sus temas de trabajo se encuentra el tema del narcotráfico. Sin embargo, a pesar de los diversos puntos de contacto, Brasil y Colombia tienen diferentes enfoques para abordar este problema.

La agenda de seguridad colombiana se ha centrado durante mucho tiempo en resolver el conflicto interno que afecta al país, ya que este problema fue la fuerza motriz de la violencia, la pobreza, del tráfico de drogas y de la delincuencia en varias áreas de su territorio. Situado entre los tres mayores productores mundiales de clorhidrato de cocaína, el problema

del tráfico de drogas y su impacto en la sociedad colombiana son factores decisivos en la formulación de políticas y estrategias del país.

Actualmente, a pesar de que el acuerdo de paz firmado presentó una posible solución al conflicto, las dificultades para implementar las medidas previstas en el acuerdo, las disidencias de las FARC, la acción del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los grupos armados organizados, la presencia de carteles extranjeros, originarios principalmente de México y vinculados al narcotráfico, la expansión de las áreas de plantación de coca y el grave problema planteado por la crisis humanitaria en Venezuela, que ha introducido a miles de ciudadanos de ese país en territorio colombiano, son los principales desafíos que se enfrentan.

Se puede decir que la solución del conflicto interno sigue siendo el punto clave de la agenda de seguridad colombiana y que los vínculos de los carteles de la droga con la guerrilla y el terrorismo representan un obstáculo significativo para una solución. El país ha logrado un éxito significativo, pero aún quedan grandes problemas por resolver. Con respecto a la región amazónica y, en particular, a la Triple Frontera, a pesar de que el Estado colombiano ha estado actuando, la prioridad y los medios colocados en el área están por debajo de lo necesario, lo que se entiende fácilmente dadas las situaciones enfrentadas en otras regiones del país.

En el caso brasileño, la agenda de seguridad actual está muy enfocada en combatir la corrupción y las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El estancamiento económico experimentado por Brasil en los últimos años ha aumentado las tasas de desempleo, lo que contribuyó al aumento de la violencia urbana. Los indicadores de violencia en las principales regiones metropolitanas del país imponen una prioridad a la acción del Estado en estas áreas.

Organizaciones criminales como el PCC, el Comando Rojo, la Familia del Norte y otras, dominan los vecindarios y las comunidades en las principales ciudades brasileñas, abarcando un amplio espectro desde el narcotráfico hasta los robos de bancos, el contrabando, la explotación del comercio callejero y la prostitución. El aumento de la delincuencia ha llevado a un crecimiento asombroso en la población carcelaria y la falta de inversión ha generado una situación delicada. El hacinamiento y la

lucha por el control interno de las unidades penitenciarias han provocado disturbios y revueltas entre los prisioneros, en los que el alto número de muertos y las escenas bárbaras a menudo conmocionan a la sociedad.

La región amazónica es un punto de relevancia para el problema de seguridad del país, ya que se presenta en la Estrategia de Defensa Nacional como una de las áreas prioritarias para la acción del Estado. En esta región, mucho más allá del tráfico de drogas, los problemas están aumentando: la minería ilegal, la biopiratería, la deforestación y la venta ilegal de madera, las invasiones de tierras y el acaparamiento de tierras, así como los problemas relacionados con la preservación de las tierras indígenas, los parques y las reservas ambientales, se vuelven inmensos desafíos dado el tamaño y las características del área.

Se puede observar que las acciones y el temario de la agenda de seguridad brasileña, aunque contemplando la lucha contra el narcotráfico, se centran en las zonas urbanas, donde vive la mayor parte de la población y donde sus efectos tendrán una mayor percepción e impacto. Además, la enorme longitud de la franja fronteriza³ y su gran permeabilidad dificultan la acción continua y ubicua. Por lo tanto, si bien la agenda de seguridad brasileña destaca la región amazónica, le resulta difícil tomar medidas efectivas y constantes para combatir las prácticas criminales en la región.

En términos prácticos, la evolución de la política brasileña con relación a la Amazonía se puede caracterizar a partir de cuatro hitos: El primero, es el comienzo del cambio con la implementación del Programa Calha Norte en 1985. Este programa construyó infraestructuras y permitió la instalación de pelotones fronterizos especiales en la Amazonía brasileña. Segundo, el establecimiento del Sistema de Vigilancia del Amazonas (SIVAM) en 2004, que integra los sistemas de control de tráfico aéreo, protección ambiental y vigilancia, estableció la capacidad de obtener imágenes de la región casi en tiempo real y favoreció el establecimiento de enlaces de comunicaciones seguros y continuos. Tercero,

3 Brasil tiene fronteras con todos los países del subcontinente, excepto Ecuador y Chile, es decir, con diez naciones, con un total de 16.885,7 kilómetros de longitud, que incluyen once Unidades de la Federación y 588 municipios, que cubren el 27% del territorio nacional.

la Estrategia de Defensa Nacional de 2008 estableció prioridades para la región, dirigiendo la reorganización y el reposicionamiento de las estructuras de las tres fuerzas armadas. Finalmente, tres años después, el lanzamiento del Plan Estratégico Fronterizo instituyó operaciones de lucha contra el crimen a través de la frontera y, dentro del alcance del plan, el Congreso Nacional ratificó una ley que otorga a las fuerzas armadas la autoridad para conducir a la policía en una franja fronteriza 150 km de la línea fronteriza.

Estos hitos le dieron al Estado brasileño los medios, la conciencia situacional, el respaldo legal, los objetivos y las formas de alcanzarlos, lo que incrementó significativamente la lucha contra el narcotráfico en la región amazónica.

El programa Calha Norte permitió a los militares construir bases, aeropuertos y otras infraestructuras cercanas a las unidades que recibirán apoyo en la frontera. Otro beneficio fue la mejora de las condiciones de apoyo para las poblaciones y comunidades amazónicas, que también recibieron inversiones. Entre 2003 y 2014, el gobierno federal asignó más de R\$ 3,8 mil millones al programa, y más del 80% de estos fondos se utilizaron en obras para el desarrollo de los municipios de la región.

En el corazón del Canal del Norte se encuentran los pelotones fronterizos especiales. El número de estos pelotones pasó de 8 en 1985, cuando comenzó el programa, a 25 en 2015. Además de sus misiones operativas, los pelotones llevan a cabo actividades de apoyo de salud y educación para las poblaciones locales y las comunidades indígenas cercanas, y proporcionan el mantenimiento de las infraestructuras locales.

SIVAM es una red compleja de radares fijos, aeronaves de vigilancia, sensores ambientales, terminales de imagen satelital, redes de comunicaciones inalámbricas, centros de recolección de datos y monitoreo de tráfico que le permiten a Brasil ejercer control ambiental, procesar información meteorológica, realizar vigilancia terrestre y aérea, monitoreo y reporte, control de tráfico aéreo y planificación y monitoreo de operaciones en la región. La información obtenida por SIVAM también se comparte con Colombia y Perú.

La Estrategia de Defensa Nacional, publicada en 2008, tuvo como gran virtud llamar la atención de la sociedad brasileña sobre cuestiones relacionadas con la defensa y la importancia de modernizar sus estructuras. El documento también reforzó la importancia de la región amazónica para el país, enfatizando que su integración requiere un proyecto basado en acciones civiles y militares que contemplen el aumento de la presencia del Estado, el desarrollo sostenible y la preservación. La estrategia también preveía el aumento de los medios militares en la Amazonía, con el fin de generar tres capacidades básicas: vigilancia, movilidad y presencia.

En junio de 2011 se lanzó el Plan Estratégico de Fronteras, una iniciativa del gobierno federal. Entre otros elementos clave, el Congreso Nacional reafirmó la concesión de la autoridad policial a las fuerzas armadas que operan en el rango de 150 kilómetros desde la línea fronteriza, lo que favoreció los esfuerzos de la Policía Federal para combatir el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas, entre otros delitos.

Dentro del alcance de este Plan, dos acciones ganaron protagonismo: las Operaciones Centinela y Ágata. El primero, coordinado por el Ministerio de Justicia y ejecutado por la Policía Federal, es permanente y busca intensificar las acciones de inteligencia para apoyar otras acciones para combatir el crimen organizado en la frontera. Las Operaciones Ágata, por otro lado, son episódicas y son conducidas por el Ministerio de Defensa. Utilizan personal militar para, en una acción ostensiva, intensificar la presencia del estado en la línea fronteriza, combatir los delitos ambientales y los delitos transnacionales.

El Plan Estratégico Fronterizo ayudó a eliminar la confusión en los roles desempeñados por las fuerzas militares y policiales y permitió que las operaciones entre estas agencias dejaran de ser eventos de corta duración y se convirtieran en una constante en la región amazónica.

La actuación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada, otro punto relevante con respecto a la política brasileña para las fronteras tuvo un gran incremento a partir del gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), cuando las fuerzas armadas comenzaron a ser empleadas en operaciones para combatir delitos transfronterizos o ambientales. Este cambio permitió al Estado contrarrestar a las organizaciones criminales con instituciones de gran

capilaridad, disponibilidad de medios y de personal y con infraestructura para arrostrar la dinámica altamente volátil del crimen organizado.

Con el objetivo de ampliar las acciones de inspección y lucha contra el narcotráfico en la Triple Frontera, la Policía Federal instaló, cerca de Tabatinga, la Base Anzol, desde donde realiza la inspección de los buques que navegan por el río Solimões. La acción cuenta con el apoyo del personal militar del ejército brasileño y forma parte del Programa Integrado de Protección Fronteriza, de 2016, que contempla la acción de las agencias de seguridad en coordinación con las Fuerzas Armadas en la lucha contra los delitos transfronterizos.

A partir de la creación de la Base Anzol, el flujo de cocaína transportada por el río Solimões disminuyó significativamente, pero se han utilizado otras rutas para llevar la droga a Manaus. Una de estas rutas es el río Negro, que en los últimos años ha mostrado un flujo creciente de drogas, armas y municiones. Además, eventualmente, la vigilancia de la Base es evadida por personas que llevan drogas a sus espaldas en los senderos de la selva a un lugar seguro donde la droga vuelve a las embarcaciones y continúa el viaje. Este desbordamiento ha sido contrarrestado por patrullas fluviales a lo largo de la canaleta del río y por el establecimiento de puntos de control aguas abajo de la Base Anzol.

Figura 3. Inspección fluvial en la Base Anzol, río Solimões



Fuente: Comando de Fronteira do Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva.

El control fronterizo requiere una intensa colaboración entre los países involucrados. Por lo tanto, el fortalecimiento de los acuerdos y las asociaciones son puntos destacados de la Estrategia de Defensa Nacional y del Plan Estratégico de Fronteras. En este sentido, Brasil, Colombia y Perú mantienen reuniones bilaterales y operaciones combinadas en la franja fronteriza. Además, se comprometen a compartir información, realizar intercambios de personal en cursos y capacitaciones, y desarrollan en conjunto productos de defensa.

En términos de cooperación internacional, cabe señalar que Brasil, Colombia y Perú son signatarios de la Convención de Palermo. Este documento define el crimen organizado transnacional y aspectos de su combate, además de sentar las bases para una mayor cooperación entre los estados en esta área. Se considera el instrumento más completo actualmente disponible para abordar el problema de la delincuencia transnacional organizada.

La amenaza del narcotráfico afecta a todos los países y la comunidad internacional ha tomado medidas para combatirlo. Las Naciones Unidas han adoptado planes de acción regionales, e iniciativas de los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han apoyado los esfuerzos en las regiones productoras y de tránsito de drogas para el establecimiento del estado de derecho.

En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2007) representa un paso importante en la lucha contra el lavado de dinero, ya que establece varias medidas para evitar que el secreto bancario proteja los ingresos del delito. Otro importante hecho es que la INTERPOL ha estado contribuyendo al intercambio de información y a la realización de operaciones combinadas.

Aún en el tema de la cooperación internacional, la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC en la sigla en inglés) firmó con el gobierno colombiano en noviembre de 2017 un acuerdo de \$ 315 millones que se transferirá a la Policía Nacional para apoyar reducción de áreas de plantación ilícita y desarrollo de actividad rural.

5. Conclusiones

A pesar de la gravedad de la amenaza, la delincuencia transnacional organizada aún no se ha entendido completamente. Se ha estudiado mucho, pero la mayoría de las veces estos esfuerzos están restringidos a una actividad o región en particular, sin llegar a una visión general del problema y sin una perspectiva global, no será posible establecer políticas para resolver este flagelo.

Una vez que el crimen se ha convertido en transnacional, las respuestas puramente nacionales son ineficaces, simplemente transportan el problema de un país a otro. Brasil, Colombia y Perú deben mirar más allá de sus fronteras para proteger su soberanía e intereses. La delincuencia no respeta la línea fronteriza y si la acción policial se detiene al llegar a ella, otorgará a los delincuentes parte de su autoridad. Por lo tanto, el intercambio de información y la cooperación policial son esenciales para combatir los delitos transnacionales en la región de la Triple Frontera.

A menudo, la acción directa sobre grupos criminales solo da como resultado el reemplazo de personas y el establecimiento de nuevas rutas y procedimientos. Como cualquier otro gran negocio, el narcotráfico obedece las leyes del mercado. Por lo tanto, la acción de las fuerzas legales también debe centrarse en este campo, interrumpiendo las cadenas económicas criminales. En este sentido, la lucha contra la corrupción y las medidas de control financiero para frenar el lavado de dinero son herramientas clave para el éxito. En esta línea de actuación, crece en importancia también la persecución de personas que realizan movimientos financieros en provecho del narcotráfico.

El COT busca establecerse donde encuentra menos resistencia. Por lo tanto, es esencial fortalecer las estructuras estatales y el estado de derecho, particularmente en áreas de mayor vulnerabilidad social. El problema de la criminalidad impone el uso generalizado y coordinado de todas las capacidades estatales. La acción de la fuerza, aislada de las medidas para recuperar las condiciones de vida de las poblaciones y aumentar la presencia del estado, genera una estabilidad temporal, que se rompe cuando estas fuerzas se retiran. Así, acciones de los gobiernos de Brasil,

Colombia y Perú en la búsqueda de mejorar los indicadores sociales en la Triple Frontera son medidas que resultaran directamente en una disminución de la influencia del narcotráfico sobre las comunidades del área.

Las alternativas para combatir el narcotráfico en la región de la Triple Frontera deberían considerar las variables sociales que influyen directa e indirectamente en los resultados. Las condiciones socioeconómicas, los bajos salarios y el deterioro de las condiciones laborales en la región contribuyen a motivar a los jóvenes a unirse a las redes criminales. La falta de expectativas laborales, la falta de protección social y el abandono escolar son otros factores que deben mitigarse en la búsqueda de reducir la capacidad de actuación de las organizaciones criminales.

Las operaciones brasileñas en el área fronteriza colombiano-brasileña han evolucionado en los últimos 30 años. Desde un enfoque defensivo y prácticamente centrado en el ejército, con pocas interacciones e iniciativas cooperativas, el escenario actual ha avanzado a una estrategia que emplea a todas las fuerzas armadas en estrecha cooperación con otras instituciones estatales, especialmente la Policía Federal, y una creciente coordinación bilateral.